

ÍNDICE ALFABÉTICO

POR LOS

NOMBRES DE LAS PARTES

A

	Página
Aduana c/. Dodero S. A. (Mihánovich Ltda.)	381
Aduana c/. Itaca Comp. Arg.	19
Aduana c/. Yeomans, Antonio	287
Amadei, Rafael c/. Grousset, Juan L. (suc.)	291
Arce, Manuel J. c/. la Nación	239
Ariano, Federico	252
Asociación Cooperativas Argentinas c/. Impuestos Internos	317

B

Balaija, A. M. c/. Francisco Piria	72
Banco de la Nación c/. Banco Internacional del Río de la Plata	110
Banco de la Nación c/. Provincia de Buenos Aires	300
Banco Hipotecario Nacional c/. Provincia de Buenos Aires	96
Banco Internacional del Río de la Plata c/. Banco de la Nación	110
Banco Provincia de San Juan c/. S. A. Frutícola de San Juan	99
Barbero y Cía. c/. Impuestos Internos	392
Belfiore, Alberto M. c/. Caja de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias	271
Boeri de Carreras, A. y otro c/. Provincia de Buenos Aires	327
Bunge y Born Ltda.	398
Buxton, Guilayn y Cía. c/. la Nación	325

C

	Página
Cabadas y La Llama c/. A. Garatto y otro	339
Cabanillas, Martín c/. S. A. Industrial y Pastoril Belga ..	251
Cabrera de Reinoso, P. y otra c/. Caja de Jubilaciones y Pensiones Militares	253
Cabrera, Fernando y Cía. c/. Provincia de Mendoza ..	305
Cáceres, Ramón	98
Caffoni, Ireneo y otros c/. Provincia de Buenos Aires ..	329
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Bancarias c/. Calcagno, R.	153
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Bancarias c/. Giovaneli, C.	138
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Bancarias c/. Mac Crindle, W. F.	95
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles c/. Muccioli, H.	127
Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados y Obreros Particulares c/. Luis E. Rodríguez	59
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias c/. Belfiore, Alberto M.	271
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias c/. Córdoba de Quiroz, E. (suc.)	296
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias c/. Heshherth, Davis A.	399
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias c/. Provincia de Buenos Aires	116
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias c/. Provincia de Santa Fe	249
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias c/. Ruiz de Quintana, M.	247
Caja de Jubilaciones y Pensiones Militares c/. Patrocinia Cabrera de Reinoso y otra	253
Calcagno, R. c/. Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias	153

	Página
Carman de Cantón, E. c/. la Nación	368
Casterán, Juan V. c/. Fisco Nacional	254
Castro, César A. o Rosso, Juan Carlos	96
Cicala José c/. Municipalidad de Rosario de la Frontera	97
Comisario de Concepción (Entre Ríos)	246
Compañía Nacional de Tabacos, S. A. c/. Provincia de Corrientes	200
Compañía Swift de La Plata c/. Municipalidad de Quilmes	205
Condini, Pedro	97
Córdoba de Quiróz, E. (suc.) c/. Caja de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias	296
Cruz, Martín B.	398
Cubas, Pablo c/. Reyes, F. R. y otros	262

D

Diadema Argentina (S. A.) c/. la Nación	346
Dodero S. A. (Mihánovich Ltda.) c/. Aduana	381

F

Fábrega, Fernando y otros	331
Fasola Castaño, Francisco	157 y 166
Fernández Rodríguez, Camilo	95
Ferrocarril Pacífico c/. Julia Martí de Arango	94
Fioravanti y Cía. c/. Provincia de Mendoza	49
Fisco Nacional c/. Casterán, J. V.	254
Fisco Nacional c/. Moreira, E. y Soc. "Yida y Cía." ..	23
Fisco Nacional c/. S. A. Crédito Ferrocarrilero e Immo- biliario	385
Foucher, Pablo E. c/. la Nación	330
Frigorífico Anglo (S. A.) c/. Provincia de Buenos Aires	45

G

	Página
Garatto, A. y otro c/. Cabadas y La Llama	339
Garriga, O. J. c/. Procurador Fiscal	144
Giovaneli, C. c/. Caja de Jubilaciones Bancarias	138
Gómez y Cortazar c/. Provincia de Buenos Aires	328
González, José D. y otros c/. Provincia de Mendoza	100
Granado, Emilio c/. Peabody y Cía., II.	248
Grousset, Juan L. (suc.) c/. Amadei, Rafael	291

H

Hasenclever e hijos, J. B. c/. la Nación	221
Hesherth, Davis Arthur c/. Caja Nacional de Jubilaciones Ferrovias	399

I

Impuestos Internos c/. Asociación Cooperativas Argen- tinas	317
Impuestos Internos c/. Barbero y Cía.	392
Impuestos Internos c/. S. A. Firestone de la Argentina ..	5
Iradi, Juan c/. Magnasco, Luis y Cía. Ltda.	248
Itaca Comp. Arg. c/. Aduana de la Capital	19

J

Juez Federal de Mendoza	84
-------------------------------	----

L

	Página
La Italia, Cía. de Seguros c/. la Nación	243
La Nación c/. Arce, Manuel J.	239
La Nación c/. Buxton, Guilayn y Cía.	325
La Nación c/. Carman de Cantón, E.	368
La Nación c/. S. A. Crédito Ferrocarrilero e Inmobiliario	385
La Nación c/. Diadema Argentina (S. A.)	346
La Nación c/. Pablo E. Foucher	330
La Nación c/. J. B. Hasenclever e hijos	221
La Nación c/. La Italia Cía. de Seguros	243
La Nación c/. F. López Albarracín	86
La Nación c/. Salazar de Repetto, Rosario	355
La Nación c/. Adalberto Staud	90
La Toja (S. A. de Pontevedra, España) c/. E. Pereyra	
Borrajo	315
Lemos Gaspar c/. Provincia de Santiago del Estero	332
Leveratto y Cía. c/. Provincia de Buenos Aires	331
López Albarracín c/. la Nación	86
Llanquileo, José	329

M

Machado, Juan B. c/. Provincia de Mendoza	99
Mac Crindle, W. J. c/. Caja Nacional de Jubilaciones de	
Empleados Bancarios	95
Magnasco, Luis y Cía. Ltda. c/. Iradi, Juan	248
Martí de Arango, Julia c/. Ferrocarril Pacífico	94
Mas y Tayeda, P. c/. Provincia de Entre Ríos	102
Méndez y Méndez, Antonio	98
Meroño, José	101
Moreira, E. y Soc. "Yida y Cía." c/. Fisco Nacional ..	23
Moreno, N. c/. Municipalidad de la Capital	121

	Página
Muccioli, H. c/. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles	127
Municipalidad de la Capital c/. Moreno, N.	121
Municipalidad de Quilmes c/. Cía. Swift de La Plata ..	205
Municipalidad de Rosario de la Frontera c/. José Cicala	97

P

Palma, Juan Angel de	257
Peabody y Cía., H. c/. Emilio Granado	248
Pereyra Borrajo, E. c/. La Toja (S. A. de Pontevedra, España)	315
Perlmutter, Leopoldo c/. P. Ventura González	395
Piria, Francisco c/. A. M. Balaija	72
Procurador Fiscal c/. O. J. Garriga	144
Provincia de Buenos Aires c/. Banco Hipotecario Nacional	96
Provincia de Buenos Aires c/. Banco de la Nación	300
Provincia de Buenos Aires c/. Boeri de Carreras, A.	327
Provincia de Buenos Aires c/. Caffoni, Ireneo y otros ..	329
Provincia de Buenos Aires c/. Caja Nacional de Jubilaciones Ferroviarias	116
Provincia de Buenos Aires c/. Frigorífico Anglo	45
Provincia de Buenos Aires c/. Gómez y Cortazar	328
Provincia de Buenos Aires c/. Leveratto y Cía.	331
Provincia de Buenos Aires c/. Rodríguez, Manuel	329
Provincia de Buenos Aires c/. Sociedad Crédito Ferrocarriero e Inmobiliario	183
Provincia de Corrientes c/. Compañía Nacional de Tabacos	200
Provincia de Entre Ríos c/. Mas y Tayeda	102
Provincia de Mendoza c/. Cabrera, Fernando y Cía.	305
Provincia de Mendoza c/. Fioravanti y Cía.	49
Provincia de Mendoza c/. González, José D.	100
Provincia de Mendoza c/. Machado, Juan B.	99

	Página
Provincia de Mendoza c/. S. A. D. Tomba	148 y 250
Provincia de Mendoza c/. Wauters, C.	275
Provincia de Mendoza c/. Zaefferer Silva, O.	38
Provincia de Santa Fe c/. Caja de Jubilaciones Ferrovia- rias	249
Provincia de Santiago del Estero c/. Lemos, Gaspar	332

Q

Quelle, Jesús	344
---------------------	-----

R

Reyes, F. R. c/. Cubas, Pablo	262
Rodríguez, Luis E. c/. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Particulares	59
Rodríguez, Manuel c/. Provincia de Buenos Aires	329
Rosso, Juan Carlos o César A. Castro	96
Ruiz de Quintana, Mercedes c/. Caja Nacional de Jubi- laciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferrovia- rios	247

S

Salazar de Repetto, R. c/. la Nación	355
Sánchez, J. L.	322
Sociedad Banco Argentino de Crédito y Capitalización, Córdoba	231
S. A. Crédito Ferrocarrilero e Inmobiliario c/. Fisco Na- cional	385
Sociedad Crédito Ferrocarrilero e Inmobiliario (S. A.) c/. Provincia de Buenos Aires	183
S. A. Firestone de la Argentina c/. Impuestos Internos	5

	Página
S. A. Frutícola de San Juan c/. Banco Provincia de San Juan	99
S. A. Industrial y Pastoril Belga c/. Martín Cabanillas ..	251
S. A. D. Tomba c/. Provincia de Mendoza	148 y 250
Sociedad "Yida y Cía." y Moreira, E. c/. Fisco Nacional	23
Staud, Adalberto c/. la Nación	90

T

Tulio César	134
-------------------	-----

U

Uriburu de Sobral, E. c/. Juan Wagner	252
---	-----

V

Valdebenito, Flabiano A.	284
Ventura González, P. c/. Perlmutter, Leopoldo	395
Verdaguer, Luis	311

W

Wagner, Juan c/. Uriburu de Sobral, E.	252
Wauters, Carlos c/. Provincia de Mendoza	275

Y

Yeomans, Antonio c/. Aduana	287
-----------------------------------	-----

Z

Zaefferer Silva, Oscar c/. Provincia de Mendoza	38
---	----

ÍNDICE ALFABÉTICO

POR MATERIAS

A

Abandono de buque. — El abandono que autoriza el art. 880 del Código de Comercio, puede efectuarse en cualquier estado de la causa.

Las costas del juicio arbitral no pueden comprenderse en el abandono, que es un medio excepcional de limitar la responsabilidad del dueño de un buque con su fortuna de mar, por hechos que le son ajenos. Página 242

Accidente de trabajo. — *Depósito de la indemnización.* (Nota).
Página 94.

Accidente de tráfico. — Véase: Pensión militar.

Acto administrativo. — No proceden la revisión ni la revocación por vía administrativa, del decreto que reconoce el derecho a una jubilación nacional, aunque se funde en errores de hecho notados con ulterioridad. Página 368.

Acto del servicio. — Véase: Pensión militar.

Aduana — (Art. 157, Tar. de Avalúos). — La goma de mastigar que viene en forma de confites debe despacharse, en un caso, por la partida del art. 157 de la Tarifa de Avalúos.

Las resoluciones que modifican las normas vigentes, no comprenden a las mercaderías documentadas con anterioridad. Página 86.

Aduana — *Defraudación* — *Multa.* — *Derecho adquirido.* (Nota). Página 398.

Aduana. — Véase: Ordenanzas de Aduana.

Aportes de la ley N° 10.650. — *Excepción de pago.* — *Multa.*
Excepción de inhabilidad de título. — *Costas.* (Nota).
Página 249.

Aportes de la ley N° 10.650. — Véase: Caja de Jubilaciones.

Aportes, devolución. — Véase: Jubilación bancaria.

Apremio contra la Nación. — De acuerdo con lo que establece el art. 7° de la ley N° 3952, no es posible seguir el procedimiento de apremio contra la Nación. Página 242.

B

Bien público o privado. — Véase: Reivindicación.

Bosques — *Derechos de inspección.* — Véase: Ferrocarril.

C

Caja de Jubilaciones. — Autorizando el artículo 55 de la ley 10.650 el procedimiento de apremio en base de la resolución del Directorio de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios a la que se atribuye carácter de instrumento público, cabe rechazar en un caso la excepción de falsedad de título por no versar ella sobre las condiciones extrínsecas del título ejecutivo, sino sobre antecedentes parlamentarios que enervarían el alcance de textos antagónicos de la ley. Página 116.

Caja de Jubilaciones. — Véase: Jubilaciones. Aportes de la ley N° 10.650.

Catcos de petróleo. — Véase: Inconstitucionalidad.

Código de Minería. — Véase: Inconstitucionalidad.

Código Rural de Catamarca. — Véase: Inconstitucionalidad.

Competencia. — Véase Jurisdicción.

Compra-venta — Acuerdo de Ministros. — Es manifiestamente nulo y no obliga a la Nación, el contrato de compra-venta celebrado en forma verbal por un Ministro de Obras Públicas, sin cumplir los requisitos establecidos en la ley de contabilidad.

Tratándose de una nulidad manifiesta, resultante de los arts. 18 y 36 del Código Civil, no es aplicable la prescripción de dos años que establecen los arts. 4030 y 4031 del citado código.

Debe admitirse la consignación efectuada por el Fisco, del objeto de la compra-venta nula, y rechazarse la reconvencción del vendedor tendiente a cobrarle el precio. Página 254.

Cómputo de servicios mixtos. — Véase: Jubilación.

Contiendas de competencia. — Véase Jurisdicción.

Contralor de la Administración. — Véase: Impuestos Internos.

Contrato de concesión. — Cumplimiento. (Nota). Página 97.

Contravenciones policiales. — Véase: Inconstitucionalidad.

Contribución de las Cajas de Jubilaciones. — Véase: Jubilación.

Contribución patronal. — Véase: Aportes ley 10.650. Caja de Jubilaciones.

Corrupción y Hurto. — (Nota). Página 97.

Cosa Juzgada. — Véase: Acto administrativo.

Costas. — Es contra la equidad imponer el gravamen de las costas a uno solo de los litigantes en vez de distribuirlo según el grado de justicia que respectivamente hayan tenido. Página 116.

Costas. — Véase: Abandono de buque.

Cubiertas — *Neumáticos.* — Véase: Impuestos Internos.

D

Debilidad mental. — Véase: Homicidio.

Declaración Jurada. — Véase: Impuestos Internos.

Decreto del P. E. — *Suspensión de catcos.* — Véase: Inconstitucionalidad.

Decreto del P. E. — *Revocación.* — Véase: Acto administrativo.

Defraudación. — Véase: Jurisdicción.

Demandas contra la Nación. — Véase: Apremio contra la Nación.

Derechos adquiridos. — *Catcos.*

Derechos de inspección. — *Bosques.* — Véase: Ferrocarril.

Devolución de aportes. — Véase: Jubilación bancaria.

Digesto Municipal. — Véase: Jurisdicción.

E

Edicto Policial. — Véase: Inconstitucionalidad.

Elecciones nacionales. — Véase: Jurisdicción.

Embajadas. — Véase: Jurisdicción.

Embargo. — *Bienes de tercero.* — Véase: Jurisdicción.

Embargo de rentas provinciales. — Véase: Rentas de las provincias.

Embargo de sueldos. — Véase: Prórroga de jurisdicción.

Emoción violenta. — Véase: Homicidio.

Error del manifiesto aduanero. — Véase: Ordenanzas de Aduana.

Error en la declaración jurada. — Véase: Impuestos Internos.

Establecimiento no afiliado. — Véase: Jubilación bancaria.

Estado militar. — Véase: Recurso extraordinario — Militar retirado.

Excepción de falsedad. — Véase: Caja de Jubilaciones.

Excepción de incompetencia. — Véase: Jurisdicción.

Explotación de bosques fiscales. — Véase: Ferrocarril.

Extradición. — *Certificado del secretario instructor.* (Nota).
Página 94.

F

Falsa manifestación. — Véase Ordenanzas de Aduana.

Faltas y contravenciones. — Véase: Inconstitucionalidad.

Ferrocarril — Construcción. — No corresponde cobrar derecho de inspección de explotación de bosques fiscales, a la empresa que obtuvo la concesión para construir un ferrocarril.

rril, con la franquicia de extraer madera de aquéllos con el fin de emplearla en los postes y durmientes necesarios para la línea a construirse y abaratar su costo. Página 385.

Fuero federal. — Véase: Jurisdicción.

Fuero local. — Véase: Jurisdicción.

H

Hipoteca — Reinscripción. — No es exigible el requisito de la protesta previa en el caso de un acreedor hipotecario en segundo término que, ignorando el remate del inmueble por el Banco Hipotecario — acreedor en primer grado — pagó la tasa correspondiente para la reinscripción de su hipoteca, cuya devolución reclama.

El plazo fijado por la ley provincial para la prescripción, no puede oponerse al que establece el Código Civil, que tiene prelación sobre aquélla.

Demostrado el monto del pago, el error y falta de causa, procede condenar a la provincia a devolver la suma que pagó el acreedor por la reinscripción no realizada. Página 300.

Homicidio. — No es viable la eximente de legítima defensa en un caso en que no ha mediado un estado de necesidad inicial que justifique la reacción ofenso-defensiva.

Probado que la víctima era un sujeto incontinente; que molestaba desde tiempo atrás al procesado y su familia por cuestiones de intereses y que tenía definida su personalidad peligrosa por antecedentes y condena anterior, debe aceptarse la emoción violenta en el homicida, que las circunstancias hicieron explicable por motivos éticos, sin que se trate de un violento o exaltado en el orden normal de la vida. Página 134.

Homicidio. — La debilidad mental no es por sí sola causa excluyente de imputabilidad. Corresponde aplicar quince años de prisión al menor de 18 años, autor de un homicidio realizado a traición, con premeditación y alevosía. Página 284.

Homicidio. — (Notas). Páginas 329 y 398.

Honorarios. — De acuerdo con lo que dispone el artículo 4º de la ley 11.672, “los peritos y profesionales de cualquier categoría que desempeñan empleo a sueldo de la Nación, no podrán reclamar honorarios en los asuntos que intervengan por nombramiento de oficio o en los que el Fisco sea parte”, no obstante a ello, que la naturaleza del informe requerido sea ajena en absoluto a las funciones oficiales del reclamante. Página 239.

Honorarios. — Véase: Jurisdicción.

Hurto y corrupción. — (Nota). Página 97.

I

Impuestos internos. — Tratándose de un simple error de transposición de cifras de la mercadería vendida, cometido al pasarla de los libros a la declaración jurada, error que no pudo pasar desapercibido, tanto más si la declaración jurada en la cual se cometió fué presentada sin el visto bueno del inspector permanente según la propia reglamentación de la Administración de Impuestos Internos debe otorgarlo o negarlo, no hubo infracción punible. Página 5.

Impuestos internos. — El impuesto interno que determina el art. 14 de la ley N° 11.252, sólo alcanza a las operaciones comerciales de tráfico de joyas y alhajas con el concepto y alcance del art. 8º, incs. 1º y 2º del Código de Comercio

y no al trabajo manual o mecánico que el industrial pone en la operación sobre materiales que el cliente le proporciona. Página 392.

Impuestos Internos. — El gravamen creado por decreto del 19 de enero de 1932 y homologado por la ley N° 11.582, a las cubiertas de goma que se introducen en el país, no es aplicable a las que vienen adheridas a los locomóviles importados, formando parte integrante del coche. Página 325.

Impuestos Internos. — Véase: Recurso contencioso.

Impuesto al consumo. — Véase: Inconstitucionalidad.

Impuesto a las herencias. — Véase: Inconstitucionalidad.

Impuestos a los róditos. — *Gratificación* (Nota). Página 330.

Impuesto de abasto o consumo. — Véase: Inconstitucionalidad.

Impuesto de solidaridad agraria. — Véase: Inconstitucionalidad.

Impuestos municipales. — Véase: Recurso extraordinario.

Imputabilidad. — Véase: Homicidio.

Inconstitucionalidad — (*C. de Proc. Crim., art. 27: validez*). — No son violatorias de la Constitución Nacional, las disposiciones por las cuales el Código de Procedimientos en lo Criminal entrega a la administración municipal o policial, el juzgamiento de determinadas faltas y contravenciones implicadas en el poder de policía, o legisla el procedimiento en los juicios sobre faltas, acordando al Jefe de Policía, jurisdicción para resolverlas. Página 311.

Inconstitucionalidad. — (*Código Rural de Catamarca*). — No debe entenderse que se somete voluntariamente al imperio de la legislación de una provincia, el que en ella vive.

desde que es obligatorio para todos los habitantes de aquella; ni puede interpretarse que al invocar determinados preceptos, renuncia tácitamente al derecho de impugnar otros que considere contrarios a la Constitución, a las leyes nacionales o a los tratados con las naciones extranjeras, salvo que entre unas y otras disposiciones exista interdependencia o solidaridad inexcusables.

El art. 30 del Código Rural de la Provincia de Catamarca es violatorio de la Constitución Nacional, en cuanto acuerda a los propietarios rurales el derecho de cobrar pastaje de ganado ajeno sólo cuando éste exceda la cantidad que el campo de su propietario pueda sostener, según la clasificación que hace el art. 29 del mismo código. Página 262.

Inconstitucionalidad. — Cateos de Petróleo. — El decreto firmado el 10 de enero de 1924 por el Poder Ejecutivo de la Nación, no excede la prescripción de la ley N° 4167, y por lo tanto, ha podido legalmente suspender la admisión de cateos de petróleo, sin distinguir entre tierras fiscales y las que no lo son.

No siendo un derecho adquirido el que tenía el minero para obtener la ampliación de su mina, el Poder Ejecutivo ha podido negárselo válidamente. Página 346.

Inconstitucionalidad — (Leyes Nos. 4097 y 11.672: válidas). — Las leyes Nos. 4097 y 11.672 no crean delitos locales incompatibles con el precepto del artículo 67, inciso 4 de la Constitución Nacional.

El Congreso procediendo como legislatura local de la Capital de la República y Territorios Nacionales, al sancionar las leyes Nos 4097 y 11.672, que prohíben y castigan el juego de loterías, o más bien que lo reglamentan supeditándolo a un objetivo en pro de la beneficencia, no afecta las garantías contenidas en los artículos 6, 8, 14 y 28 de la Constitución Nacional. Página 231.

Inconstitucionalidad (ley de Corrientes N° 452). — La ley N° 452 de la Provincia de Corrientes que en su artículo 8°, inciso 5° grava con patente de cien pesos a los dependientes o agentes de casas establecidas en territorio provincial, que salgan a vender (inciso 16); y con la de setecientos pesos a los comisionistas y viajantes vendedores de fuera de la provincia, crea un impuesto diferencial arbitrario, que dificulta el comercio interno del país y viola la garantía contenida en los artículos 16 y concordantes de la Constitución Nacional. Página 199.

Inconstitucionalidad (ley de Entre Ríos N° 2943). — La ley N° 2943 de la Provincia de Entre Ríos que sobre la solidaridad agraria y con propósitos de ayuda a los agricultores y granjeros necesitados, hace recaer el impuesto sobre una clase de personas: las que soliciten o deduzcan ejecuciones por prenda agraria o créditos hipotecarios, es violatoria de la Constitución Nacional (Arts. 16 y 17 C. N.). Página 102.

Inconstitucionalidad (ley de Mendoza N° 886: su validez). — El impuesto creado por el artículo 4° de la ley 886 de la Provincia de Mendoza sobre la uva, el vino y el aumento de la contribución territorial, no pugna con los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, porque no incide sobre un determinado grupo de personas y porque tiene un fin de utilidad general y bien común. Página 148.

Inconstitucionalidad (ley de Mendoza N° 1068, art. 16). — El art. 16 de la ley N° 1068 de la provincia de Mendoza que crea un impuesto por cada kilo de ácido tartárico o cítrico que se consuma en dicho estado y su reglamentación, que determina la forma de percepción del mismo, evidencia que no se trata de un impuesto al consumo, puesto que recae sobre la mercadería, antes de haberse incorporado a la masa de riqueza de la provincia, afectando el principio de

la libre circulación territorial (Arts. 9, 10, 11 y 67, inciso 12 de la Constitución Nacional).

No pueden las provincias gravar la introducción en su territorio de productos despachados en una aduana exterior, pues además de contrariar preceptos constitucionales, se menoscaba financieramente el derecho de la Nación, y porque también, es facultad privativa de ésta, la regulación del comercio exterior del país. Página 48.

Inconstitucionalidad (leyes de Mendoza Nos. 758, 759 810 y 857). — Reconocida la inconstitucionalidad alegada y no pudiendo la provincia excusar el deber de reconocer los hechos en que la repetición se funda, en la circunstancia de tratarse de sucedidos bajo otras administraciones, deben tenerse por reconocidos los pagos y la protesta, tanto más cuanto resulta también de prueba directa rendida por el actor. Página 38.

Inconstitucionalidad (ley de Mendoza N° 854). — *Devolución de multas.* (Nota). Página 100.

Inconstitucionalidad (ley de Mendoza N° 922). (Nota). — Página 250.

Inconstitucionalidad de ley provincial. — *Impuesto a las herencias.* (Nota). Página 327.

Inconstitucionalidad (leyes de Buenos Aires Nos. 3907 y 4197). — *Impuesto al consumo.* (Nota). Página 328.

Inconstitucionalidad (ordenanza de la Municipalidad de Quilmes). — La Ordenanza Municipal de Quilmes que grava con un derecho de abasto las carnes destinadas al consumo del Municipio, estableciendo para liquidarlo un sistema por el cual las carnes faenadas dentro del mismo, pagan menos que las que se introducen, crea un impuesto diferencial arbitrario, violatorio de la libre circulación de las mercancías, asegurada por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Página 205.

Inconstitucionalidad. — *Aduana interior* (Nota). Página 331.

Inconstitucionalidad. — *Suspensión de catcos de minas.* — Véase: Recurso extraordinario.

Interdicto. — Véase: Jurisdicción.

J

Jubilación bancaria. — Concedida la jubilación extraordinaria por invalidez, no procede el cómputo de los servicios prestados al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a efecto de obtener la ordinaria, puesto que el mencionado establecimiento no está afiliado a la Caja respectiva. Página 138.

Jubilación bancaria. — No aludiendo el artículo 16 de la ley N° 11.575 a los aportes bancarios, éstos no son equiparables a las jubilaciones y pensiones, y en consecuencia pueden cederse. Página 153.

Jubilación bancaria. — (Nota). Página 399.

Jubilación. — *Contribución de las Cajas.* (Nota). Página 95.

Jubilación ferroviaria. — La jubilación ferroviaria obtenida bajo el régimen de la ley N° 10.650 ha podido ser válidamente disminuída de acuerdo con la ley N° 12.154, sin que obsten a ello las disposiciones del Código Civil sobre irretroactividad de las leyes.

Aun cuando hayan transcurrido varios años desde que obtuvo la jubilación, corresponde ampliar el cómputo de los servicios de un jubilado ferroviario, con el fin de subsanar el error de una situación, desde que por imperio de la ley N° 12.154 se ha reconocido a la Caja el derecho de reajustar situaciones ampliamente consentidas. Página 271.

Jubilación ferroviaria. — Véase: Aportes de la ley N° 10.650.

Jubilación ferroviaria. — Véase: Cajas de Jubilaciones.

Jubilación ferroviaria. — Véase: Pensión ferroviaria.

Jubilación nacional. — Véase: Acto administrativo — Prescripción.

Jubilación. — *Servicios mixtos.* — Persiguiéndose en el caso, el beneficio de la jubilación que acuerda el artículo 18 inciso 34 de la ley 11.110 a cuyo fin se invocan servicios mixtos prestados en la Armada Nacional, empresas ferroviarias e instituciones particulares, es indispensable que el solicitante a quien se le han desestimado los primeros, obtenga resolución definitiva en las Cajas Civil y Ferroviaria y sus Tribunales de Alzada, para que la de la ley número 11.110 le resuelva el caso. Página 59.

Jubilación. — *Servicios mixtos.* — De acuerdo con lo que dispone el artículo 58 de la ley N° 4349, no procede computar servicios militares (mecánico de la Armada) para obtener una jubilación derivada de la Caja Civil. Página 127.

Juicio de apremio. — Véase: Recurso de apelación.

Jurisdicción. — *Acción personal.* — *Inhibitoria.* — (Nota).
Página 248.

Jurisdicción. — *Acción personal.* — *Lugar convenido.* — (Nota).
Página 251.

Jurisdicción aduanera. — Véase: Ordenanzas de aduana.

Jurisdicción. — *Contienda de Competencia.* — *Defraudación.*
— (Nota). Páginas 96 y 101.

Jurisdicción. — *Embajadas.* — Es competente la justicia ordinaria, para conocer en el proceso por lesiones seguido

contra el chauffeur de un embajador extranjero, puesto por éste a disposición de las autoridades del país. Página 344.

Jurisdicción. — Fuero federal. — Procede la jurisdicción federal en las causas criminales por hechos delictuosos perpetrados contra o en menoscabo directo de los intereses del Banco de la Nación Argentina. Página 110.

Jurisdicción. — Fuero federal. — El conocimiento de un proceso instruido contra un empleado de un Juez de Sección por abuso de autoridad, empleado que fué destacado por aquél para vigilar y propender al fiel cumplimiento de la ley electoral (Art. 93, ley N° 8371), corresponde a la Justicia Federal. Página 144.

Jurisdicción. — Fuero federal. — Siendo extranjero el demandado y argentinos los actores — madre e hijo que inician el juicio como herederos de otro extranjero — es procedente el fuero federal invocado por el primero. Página 291.

Jurisdicción. — Fuero federal. — Portación de armas. — Elecciones nacionales. (Nota). Página 246.

Jurisdicción. — Fuero local. — Corresponde a la justicia ordinaria de la Provincia de Tucumán el conocimiento de una causa instruida por violación de secretos y defraudación, si, como resulta prima facie de sus antecedentes, la correspondencia, en el momento de ser substraída, había dejado de estar bajo la custodia o servicio del correo. Página 322.

Jurisdicción. — Fuero local. — No es de competencia de la justicia federal el interdicto de recobrar la posesión, intentado contra quien ante la justicia provincial obtuvo el desalojo de los encargados del actor en este juicio, porque es en la misma justicia provincial donde deben fenecer los juicios ante ella comenzados. Página 72.

Jurisdicción. — Juicio ejecutivo. — Embargo. — El juez provincial ante quien tramita un juicio ejecutivo, no es competente para ordenar el embargo de bienes de un tercero extraño al pleito y domiciliado en la Capital Federal. Página 339.

Jurisdicción. — Justicia Correccional. — Digesto Municipal. Infracción. — (Nota). Página 252.

Jurisdicción. — Levantamiento de embargo. — (Nota). Página 99.

Jurisdicción militar. — Véase: Recurso extraordinario. Militar retirado.

Jurisdicción originaria. — Corresponde entender originariamente a la Corte Suprema en el juicio sobre cobro de honorarios profesionales promovido contra una provincia por quien celebró con ella un contrato de locación de servicios. Página 275.

Jurisdicción originaria. — No procede la jurisdicción originaria de la Corte Suprema para conocer en demanda contra una provincia por inconstitucionalidad del impuesto al capital en giro, si con anterioridad la misma cuestión había sido promovida ante la justicia provincial terminando el juicio por haber sido anulado todo el procedimiento, pues ello importó la prórroga de la jurisdicción concurrente. Página 45.

Jurisdicción originaria. — Locación de servicios. — (Nota). Página 99.

Jurisdicción originaria. — Véase: Inconstitucionalidad.

Jurisdicción. — Prenda agraria. — Concurso civil. — (Nota). Página 252.

Jurisdicción. — Prórroga. — Importa prórroga tácita de jurisdicción, el silencio observado por el deudor contra quien se ha dictado sentencia de trance y remate, cuyo sueldo ha sido embargado habiéndosele efectuado las respectivas deducciones. Página 395.

Justicia correccional. — Véase: Jurisdicción.

Justicia provincial. — Véase: Jurisdicción.

L

Lecho de río desecado. — Véase: Reivindicación.

Legítima defensa. — Véase: Homicidio.

Ley de afirmados de Buenos Aires N° 4069. — Su validez. (Nota). Página 96.

Ley N° 4581. — Véase: Pavimento.

Ley N° 12.154. — Véase: Jubilación Ferroviaria.

Leyes militares. — Véase: Recurso extraordinario. Militar retirado.

Libre circulación territorial. — Véase: Inconstitucionalidad.

Locación de servicios. — Habiendo demostrado el actor, que recibió comisión del P. E. de Mendoza en acuerdo de ministros, para efectuar determinados estudios técnicos de irrigación; que su trabajo fué presentado dentro de término, recibido sin observación y utilizado por el gobierno, y no pudiendo la Corte Suprema, en este caso, revisar el criterio de apreciación del Gobierno de Mendoza acerca de la urgencia de la obra, debe condenarse a la provincia a pagar la cantidad que fijen árbitros, conforme al art. 1627 del Código Civil. Página 275.

Locación de servicios. — Véase: Jurisdicción.

M

Manifiesto de entrada. — Véase: Ordenanzas de aduana.

Marca. — Véase: Recurso extraordinario.

Matrícula de martillero. — La inscripción obtenida por un martillero en el Registro Público de Comercio de la Capital, no obliga a las autoridades de las provincias o de los territorios a ordenar su inscripción en ellos; mucho menos si, como en el presente caso, existe al respecto cosa juzgada, en razón de haberse rechazado el pedido con anterioridad por las autoridades del territorio. Página 257.

Militar retirado. — El militar retirado, aun cuando en forma absoluta, que tenga el derecho al uso del uniforme y título del grado, está sujeto a las leyes y reglamentos militares y alcanzado por la jurisdicción del Tribunal de Honor, que pudo imponer, como impuso, una pena establecida por el art. 51 de la ley N° 9675, no habiendo existido violación del art. 95 de la Constitución Nacional, pues la intervención del P. E. no es incompatible con tal garantía, ya que obró también dentro de la órbita de sus atribuciones al privarlo por determinado tiempo, de parte de sus sueldos, pues la suspensión de empleo es pena comprendida en el Código de Justicia Militar. Página 166.

Mercaderías extranjeras. — Véase: Inconstitucionalidad.

Multa. — Véase: Recurso contencioso. Aduana.

N

Neumáticos. — *Cubiertas.* — Véase: Impuestos Internos.

Nulidad de compra-venta. — Página 254.

O

Oficios. — Véase: Superintendencia.

Ordenanzas de aduana. — De acuerdo con lo que disponen los arts. 454, 846 y concordantes de las Ordenanzas de Aduana, las rectificaciones en el manifiesto de la carga, pueden hacerse por el Capitán dentro del término de cuarenta y ocho horas y mientras la mercadería se halle a bordo. La denuncia anterior a ese término, efectuada por empleados aduaneros, surte plenos efectos legales, si aquél no efectuó en tiempo la rectificación debida. Página 19.

Ordenanzas de aduana. — La investigación judicial de las infracciones cometidas en el despacho de determinadas mercaderías, no se halla impedida por la circunstancia de que éstas hayan salido de la jurisdicción aduanera (Arts. 444, 1025 y 1044, Ordenanzas de Aduana). Página 23.

Ordenanzas de aduana. — Demostrado que el error del manifiesto consistió en declarar mercadería de más y no de menos, sin intención de introducirla clandestinamente, corresponde admitir su corrección solicitada cinco días después, de acuerdo con lo que dispone el art. 100 del decreto reglamentario de la ley de aduanas. Página 287.

Ordenanzas de aduana. — Tratándose de mercaderías nacionales o nacionalizadas, transportadas por un buque nacional entre puertos de la República, exentas del pago de derechos aduaneros, que no pudieron ser desembarcadas en el punto de destino y llegaron a otro puerto con guía de removido, no procede aplicar la sanción del art. 985 de las Ordenanzas de Aduana. Página 381.

Ordenanzas de aduana. — *Jurisdicción.* — (Nota). Página 331.

Ordenanzas de aduana. — Véase: Aduana.

P

Pago por error. — Véase: Hipoteca.

Pastaje. — Véase: Inconstitucionalidad.

Patentes arbitrarias. — Véase: Inconstitucionalidad.

Pavimento de calles en la zona portuaria. — No procede la repetición de lo pagado en razón del pavimento construido en el Puerto de la Capital, puesto que la ley N° 4581 no derogó en manera alguna ni siquiera implícitamente la ley N° 4391, y así no puede ser impugnada la validez constitucional del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 19 de junio de 1908 en cuya virtud se obligara a los demandantes al pago del pavimento. Página 221.

Pensión ferroviaria. — Fallecida la viuda del jubilado, pasa a sus hijos el derecho a la pensión solicitada por aquélla, aunque la Caja — que reconoció ese derecho — no la hubiera otorgado aún.

No obstante lo dispuesto por la ley N° 12.154, no puede declararse prescripto el derecho de solicitar la pensión, si ésta fué reclamada con anterioridad a la sanción de aquella ley, a los ocho meses de fallecido el causante. Página 296.

Pensión ferroviaria. — *Prescripción.* — (Nota). Página 247.

Pensión militar. — La reincorporación de un militar retirado, al servicio en tiempo de paz, no comporta su reingreso a la actividad, de acuerdo con la ley N° 9675, desde que el retiro es definitivo y cierra la carrera de las armas. A los efectos de la liquidación de los servicios prestados en esa oportunidad, no es procedente fusionarlos en una sola categoría con los anteriores, para colocarlos bajo el denomi-

nador común del sueldo más alto que hubiera percibido el militar retirado o sea el del último presupuesto, sino que deben sumarse sin confundirse. Página 355.

Pensión militar. — Accidente de tráfico. — Acto del servicio. (Nota). Página 253.

Peritos empleados nacionales. — Véase: Honorarios.

Personal doméstico. — Embajadas. — Véase: Jurisdicción.

Prescripción. — El derecho a repetir el pago de lo abonado en virtud de ley impositiva inconstitucional, prescribe a los diez años. — Página 38.

Prescripción. — No habiendo el interesado en un caso de reclamo de sueldos, intentado el pronunciamiento administrativo en los plazos que establece el artículo 2º de la ley N° 3952, corresponde declarar prescripta la acción (Art. 4023, Cód. Civil), ya que aquellas tramitaciones no interrumpen el curso de la prescripción. Página 90.

Prescripción. — Véase: Recurso extraordinario.

Prescripción. — El plazo fijado por la ley provincial para la prescripción, no puede oponerse al que establece el Código Civil, que tiene prelación sobre aquélla. Página 300.

Prescripción. — Siendo la prescripción de orden público, sólo quedan exceptuadas las acciones que menciona el art. 4019 del Código Civil y aquellas que expresamente mencionan otras leyes. Así, pues, por aplicación del art. 4031 del citado código, prescribe a los dos años la acción para anular el decreto que concede una jubilación nacional. Página 368.

Prescripción. — Ver: Recurso extraordinario.

Prescripción adquisitiva. — Véase: Reivindicación. Página 183.

Prescripción. — Véase: Pensión ferroviaria.

Prórroga de jurisdicción. — Véase: Jurisdicción.

Protesta previa. — Véase: Hipoteca.

Provincias. — *Embargo de rentas.* — Véase: Rentas de las provincias.

R

Reclamos administrativos. — Véase: Prescripción.

Rectificación del manifiesto de carga. — Véase: Ordenanzas de aduana.

Recurso contencioso. — Procede el recurso contencioso que autoriza el art. 27 de la ley N° 3764, contra la resolución del Administrador General de Impuestos Internos que, en cumplimiento de una orden del Ministro de Hacienda de la Nación, condena a una asociación al pago de una multa. Página 317.

Recurso de apelación. — Es procedente el recurso de apelación legislado en el art. 3° de la ley 4055, en un juicio de apremio seguido contra la Nación, en el cual la resolución de la Cámara Federal tiene efecto de sentencia definitiva. Página 242.

Recurso extraordinario. — No procede el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley número 48 en un caso en que la decisión que lo motiva es contraria a la legalidad y constitucionalidad de una ordenanza Municipal que grava los locales destinados al alojamiento de caballos de carrera. Página 121.

Recurso extraordinario. — No procede el recurso extraordinario contra resolución ministerial que aplicó un arresto de dos meses por no haber concurrido el militar retirado, citado para que compareciera ante el Tribunal de Honor constituido por haber dirigido aquél una carta abierta, reputada ofensiva, al Presidente de la República, ni procede tampoco contra la pena de suspensión de empleo por un año aplicada por no haberse presentado a cumplir aquel arresto, pues trátase de medidas vinculadas a la disciplina militar, impuestas por funcionarios habilitados para ello, por lo que no se ha violado en el caso el art. 18 de la Constitución Nacional y desde que el Tribunal de Honor instituido por la ley N° 9675 tiene jurisdicción sobre los militares retirados con uso del título del grado y del uniforme. Página 157.

Recurso extraordinario. — No procede el recurso extraordinario respecto a la mera interpretación de las leyes militares aplicables en la solución de las cuestiones planteadas, como es el efecto de recusación con causa al Presidente de la República, para resolver aplicando el art. 51 de la ley N° 9675.

Procede el recurso extraordinario en lo referente a la defensa fundada en que por hallarse el recurrente en situación de retiro, no le alcanza la jurisdicción de las leyes militares y también en cuanto se alegó la inconstitucionalidad del decreto reglamentario del art. 51 de la ley N° 9675, por ser contrario al 86 de la Constitución Nacional. Página 166.

Recurso extraordinario. — El punto sobre prescripción de la acción, es una materia extraña al recurso extraordinario. Página 231.

Recurso extraordinario. — Procede el recurso extraordinario cuando el que lo deduce ha invocado en tiempo y forma

disposiciones de la Constitución Nacional en amparo de su derecho, y éste ha sido desconocido en el fallo recurrido. Página 257.

Recurso extraordinario. — Aun cuando el actor no haya planteado la cuestión federal al trabarse la *litis contestatio*, porque no tuvo oportunidad de hacerlo entonces, procede el recurso extraordinario si la planteó en el alegato de bien probado, de modo que los jueces de primera y segunda instancia pudieron examinarla y resolverla. Página 262.

Recurso extraordinario. — Cuestionada la interpretación de la ley N° 10.650 y sus complementarias, procede el recurso extraordinario respecto de la decisión contraria al derecho que se ha fundado en aquéllas. Página 296.

Recurso extraordinario. — No tiene carácter de sentencia definitiva ni produce efecto irreparable, la resolución por la cual se decide que la falta de personería puede ser tramitada como excepción de previo y especial pronunciamiento, y, por lo tanto, no procede contra ella el recurso extraordinario. Página 315.

Recurso extraordinario. — Procede el recurso extraordinario contra el auto que, sin ser una sentencia definitiva, produce efectos irreparables en la ejecución de sentencia — como lo es el que deniega un embargo sobre las rentas que corresponden a la provincia de acuerdo con la ley nacional N° 12.139 — haciendo prevalecer la presunta inversión de fondos que se atribuye a las leyes locales, sobre los derechos que acuerda la ley civil. Página 332.

Recurso extraordinario. — Aunque en el caso se discute la aplicación de disposiciones del Código de Minería, procede el recurso extraordinario porque durante la secuela del juicio, el apelante ha fundado su derecho en la interpreta-

ción de una ley del Congreso y ha sostenido la inconstitucionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación. Página 346.

Recurso extraordinario. — Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que desconoce la exención de un impuesto, acordada por decreto nacional en cumplimiento de la ley. Página 385.

Recurso extraordinario. — *Marca.* — *Prescripción.* — (Nota). Página 248.

Régimen de solidaridad o reciprocidad. — Véase: Jubilación bancaria.

Reglamentos y ordenanzas militares. — Véase: Recurso extraordinario. Militar retirado.

Reinscripción de hipoteca. — Véase: Hipoteca.

Reivindicación. — Debe rechazarse la acción reivindicatoria fundada en que el terreno que se pretende recuperar formó parte del lecho del Riachuelo (bien público, artículo 2340, inciso 4º, Código Civil), que al quedar descubierto o desecado por efecto de una rectificación natural del río, pasó a ser un bien privado del Estado, desde que el reivindicado adquirió el dominio por la prescripción de diez años con título y buena fe (artículo 3999, Código Civil), dado que contra quien se prescribe (Provincia de Buenos Aires), debe reputársele presente dentro de su territorio. Página 183.

Removido de mercaderías nacionales (aduana). — Véase: Ordenanzas de aduana.

Rentas de las provincias. — No procede el levantamiento de un embargo trabado sobre las rentas correspondientes a la provincia por aplicación de la ley Nº 12.139, si el represen-

taute de la misma no ha demostrado, con la documentación respectiva, que el saldo que resulte después de pagados los servicios de los créditos privilegiados, es tan exiguo que no alcanza a cubrir la suma reclamada, o que, en caso de excederla, es indispensable para atender los gastos de la vida normal de la provincia, por la carencia de otras rentas. Página 305.

Rentas de las provincias. — Procede el embargo de las rentas correspondientes a una provincia por aplicación de la ley nacional N° 12.139, si no resulta que esa medida, pueda ocasionarle una perturbación en su vida normal. Página 332.

Retiro definitivo. — Véase: Pensión Militar.

Retroactividad. — Véase: Jubilación ferroviaria.

Revisión de decreto administrativo. — Véase: Acto administrativo.

Robo. — (Nota). Página 398.

S

Sentencia definitiva. — Véase Recurso extraordinario.

Servicios mixtos. — Véase: Jubilación.

Sucesión. — *Nacionalidad de los herederos.* — Véase: Jurisdicción.

Superintendencia. — No corresponde autorizar a los Secretarios de los Juzgados de Sección para suscribir oficios y comunicaciones expedidos en los juicios. Página 84.

Suspensión de catcos. — Véase: Inconstitucionalidad.

T

Tierras fiscales. — *Petróleo.* — Véase: Inconstitucionalidad.

Trabajo manual. — “*Hechuras*”. Véase: *Impuestos internos.*

Tribunal de honor. — Véase: Recurso extraordinario. Militar retirado.

V

Venia del Congreso. — Véase: Prescripción.

Vía de apremio. — Véase: Caja de Jubilaciones.

Vía de apremio contra la Nación. — Véase: Apremios contra la Nación.

Violación de correspondencia. — Véase: Jurisdicción.

FALLOS
DE LA
CORTE SUPREMA
DE
JUSTICIA DE LA NACION

Con la relación de sus respectivas causas

PUBLICACION DIRIGIDA
POR LOS
DOCTORES RAÚL OIMÉNEZ VIDELA Y RAMÓN T. MÉNDEZ
Secretarios del Tribunal

VOLUMEN 175 — ENTREGA PRIMERA



IMPRENTA
DE LA COLONIA HOGAR
"RICARDO OUTIERREZ"
MARCOS PAZ - F. C. S.
1936

FALLOS
DE LA
CORTE SUPREMA
DE
JUSTICIA DE LA NACION

Con la relación de sus respectivas causas

PUBLICACIÓN DIRIGIDA
POR LOS
DOCTORES RAÚL GIMÉNEZ VIDELA Y RAMÓN T. MÉNDEZ
Secretarios del Tribunal

Y
RICARDO E. REY
Prosecretario

VOLUMEN 175 — ENTREGA QUINTA



IMPRENTA LOPEZ
PERÚ 666 — BUENOS AIRES
1937